

# El de acá y los otros 98: un enfoque global

**Oscar Pino Santos**

*Economista e historiador. Consejo de Estado.*

El primer centenario de los memorables acontecimientos ocurridos en 1898 ha convocado la atención de los más diversos círculos —singularmente los académicos—, tanto en nuestro espacio caribeño como en la península ibérica y la vecina potencia norteamericana. Fue aquel el año en que se produjo la intervención de esta última en la guerra que libraban los cubanos por su independencia —evento que, con la derrota militar de España, marcó el inicio de la condición dependiente de Cuba (en una primera fase como virtual protectorado de los Estados Unidos) y la abiertamente colonial de Puerto Rico y Filipinas.

El énfasis que suele ponerse en el recuento y análisis de tales hechos está, desde luego, justificado. Mas, acaso, resultaría útil advertir el carácter un tanto unilateral de ese enfoque. Pues, sin mengua de la trascendencia que debe acreditarse a aquella intervención y sus consecuencias, convendría recordar que aquel año 98 estuvo también signado por acontecimientos ocurridos en otros escenarios —en el continente africano y en el asiático— cuyas implicaciones históricas no debieran subestimarse. Fue 1898, en efecto, el año en que culminó la tristemente célebre «rebatña» por Africa,

prácticamente repartida entre las potencias europeas en medio de agresivas pugnas que por poco desencadenan una guerra entre dos de ellas (Gran Bretaña *vs.* Francia: Incidente de Fashoda) mientras, anegados en sangre, eran liquidados los últimos focos de rebeldía e independencia de los aborígenes africanos. En 1898, asimismo, las propias potencias europeas —luego de casi seis décadas de imposición de tratados desiguales a la decadente dinastía Qin— iniciaron una nueva y relampagueante fase de sus agresiones contra China, a la que ahora se repartieron en «zonas de influencia» que redujeron aquella milenaria —y otrora poderosa— civilización a un *status* semicolonial.

Esta versión más amplia y comprensiva de los sucesos acaecidos en 1898 resulta imprescindible para el examen, en toda su hondura, del proceso histórico de más vastos alcances —y una misma raíz en su origen— que tenía lugar entonces, y del cual la intervención norteamericana en el conflicto cubano-español, aunque importante, solo representó un episodio. El distanciamiento geográfico de los hechos (en tres continentes), en contraste con la puntual coincidencia en el tiempo (1898); la identidad y rango

de sus protagonistas (las grandes potencias) y sus víctimas (países del Tercer mundo), así como su índole (reparto territorial del planeta mediante el ejercicio violento de la superioridad económica, política y sobre todo militar), se advierten reveladores. Sugieren, sin dudas, la presencia de un nuevo y determinante factor histórico como trasfondo de aquellos acontecimientos. Y no estamos, desde luego, descubriendo una noción inédita o sorprendente, si la identificamos con la alborada del fenómeno imperialista contemporáneo que —si bien precedida por hechos ocurridos desde tiempo atrás— irrumpió en su forma más dramática, brutal y escandalosa precisamente en el año 1898.

Más para referirnos a cómo ello tuvo lugar no solo en los archipiélagos caribeño y filipino, sino también en África y China, será necesario tomar en cuenta ciertos antecedentes.

## La economía mundial a fines del XIX

Desde las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, el auge económico europeo y estadounidense —al que comienza a incorporarse Japón a partir de la Restauración Meiji en 1868— asume un ritmo acelerado. Progresos que a Gran Bretaña costaron un siglo de graduales avances, con la llamada Segunda Revolución Industrial —en la que, mucho más decisivamente que en la primera, la ciencia desempeña un papel protagónico—, traducida de inmediato en epicales innovaciones tecnológicas que se extienden a otros países en solo quince o veinte años.

Se introducen máquinas cada vez más perfeccionadas, poderosas y eficientes. Surgen nuevos portadores (petróleo) y formas de energía (electricidad). Se imponen métodos (Bessemer, Siemens-Martin) para la producción de acero, que así va desplazando al hierro. Se extienden prodigiosamente los medios de transporte con las mejoras en las técnicas de construcción de carreteras, la ampliación de las redes ferroviarias y la multiplicada botadura de modernos buques. La química da a luz materiales nuevos, y descubre nuevas posibilidades en otros. La física revoluciona las comunicaciones, que ahora interconectan los lugares más distantes del planeta con la telegrafía, el cable submarino y los teléfonos. Incluso las artes de guerra experimentan el impacto de los avances, con la aparición de más efectivas armas de fuego.

Pero las asimetrías en los niveles de desarrollo a escala mundial que acompañan esa evolución son impresionantes.

En primer lugar entre el conjunto de potencias capitalistas y lo que hoy llamamos Tercer mundo, que fue surgiendo en aquella coyuntura al quedar los países

que lo componen —algunos de ellos a la vanguardia entonces entre los más avanzados— marginados y cada vez más a la zaga respecto al dinámico progreso del capitalismo europeo y norteamericano.

Paul Bairoch, luego de laboriosos cálculos, nos ofreció hace unos años las más aproximadas estimaciones estadísticas acerca de aquel proceso.

En 1750 Europa no representaba más que el 23,2% de la producción manufacturera mundial, pero en 1860 llegaba al 53,2% (60% incluyendo los Estados Unidos) y en 1900 absorbía el 62,2% (y un 85,8% con los Estados Unidos).

Mientras tanto, el Tercer mundo (con India y China a la cabeza) retrocedía del 73,0% (1750) al 36,6% (1860) y a solo un 11,0% (1900). Este Tercer mundo resultó así el gran «perdedor» en aquella acelerada evolución económica que impulsó el capitalismo durante el siglo y medio que culmina en las postrimerías del XIX. En algunos casos, el deterioro fue bien dramático. China, en el mismo sector de producción manufacturera, cayó de una participación a nivel mundial de un 32,8% en 1750 a solo 6,2% en 1900. India-Pakistán, en igual período, de 24,5% a 1,7%.

El desigual ritmo de desarrollo, sin embargo, involucraba también a los propios países del norte capitalista industrializado.

A la cabeza de aquellos desenvolvimientos se había encontrado siempre Gran Bretaña, cuna de la primera revolución industrial, dueña del más colosal imperio colonial de la historia y reina de los mares. Pero a fines del XIX, su ex colonia norteamericana —que en 1750 solo exhibía un casi deleznable 0,1% de la producción manufacturera mundial—, en 1860, ya como los Estados Unidos, esta se apreciaba en un 7,2%, y en 1900 llegaba a un 23,6% y desplazaba del primer lugar a su metrópoli de otrora. La propia Gran Bretaña, sin embargo, ranqueaba entonces en una segunda posición (18,5%) que conviene calificar. En niveles de industrialización per cápita se mantenía en la posición cimera, continuaba poseyendo su vasto imperio colonial y supremacía marítima, y Londres era aún el centro comercial, inversionista y de negocios más poderoso del planeta.

Alemania, que después de su unificación se había graduado como imperio (1870) e iniciado un dinámico ritmo de crecimiento, ocupaba ya, en 1900, un tercer lugar (13,2%), por encima de Francia y Rusia (7,8%). A cierta distancia se ubicaba entonces el imperio Habsburgo (4,7%) y aún más lejos Italia y Japón (2,5%).

## La aurora de los monopolios

Los desiguales, pero en general impresionantes, avances económicos de los países industriales del norte

vinieron también acompañados —en proceso de íntimas interrelaciones— por importantes cambios en los modos de funcionamiento del capitalismo y sus superestructuras.

Desde aproximadamente los inicios del último tercio del XIX, en efecto, ese régimen comenzó a transitar de una fase de libre concurrencia a otra en que desempeñaban un papel cada vez más protagónico formas de organización de empresas con tendencias a la monopolización de los mercados. Al principio, por coordinación de acciones entre ellas y después, por el desmesurado crecimiento de algunas, fue imponiéndose en los más importantes sectores lo que años más tarde, con no poco eufemismo, ciertos economistas denominaron condiciones de «competencia imperfecta». Este proceso trajo consigo fenómenos de fusión del capital industrial con el bancario, el surgimiento de oligarquías financieras y el vínculo funcional más íntimo entre estas últimas y los gobiernos —el desarrollo paulatino de lo que se ha llamado capitalismo monopolista de Estado (CME).

Un proceso similar —al que conviene aludir a los fines de esta exposición— tuvo lugar en los Estados Unidos, aunque con algunas características propias. Con la guerra civil (1861-65), la actividad económica había cobrado un gran impulso. La agricultura experimentó una colosal expansión, apoyada por la introducción de maquinaria y la aplicación de métodos científicos de laboreo de la tierra (en solo las tres o cuatro décadas anteriores al final de siglo se incorporaron áreas de cultivo equivalentes a toda la superficie de Europa Occidental). En una nueva fase del *westward movement*, la mitad oeste del territorio se convirtió en una enorme región ganadera. Al mismo tiempo, los avances en el transporte y otros sectores fueron extraordinarios. La revolución industrial había demorado un tanto en llegar, pero sobre la medianía de siglo su corolario —el sistema fabril— ya desplazaba la producción tradicional de pequeños talleres individuales y la labor hogareña, y en el Censo de 1890 se pudo constatar que la producción manufacturera había dejado atrás la agropecuaria como fuente del ingreso nacional. En las postrimerías del XIX —sobre la base de sus inmensos recursos naturales, inmigración masiva de fuerza de trabajo, desarrollo científico-técnico, industrialización arancelariamente protegida e incluso vigoroso espíritu empresarial—, los Estados Unidos eran la primera potencia económica del mundo.

Por otro lado, desde aproximadamente comienzos del último tercio de la centuria, la transición de un régimen de libre concurrencia a otro de auge monopolista, de concentración del capital y centralización de la producción, fue imponiéndose como en Europa, si bien, en el caso norteamericano,

con el acompañamiento de ciertos rasgos de corrupción, escándalo y espectacularidad verdaderamente únicos. En ello desempeñaron un papel decisivo aquellos protagonistas del proceso que dieron lugar a esa singular bibliografía que inician Ida M. Tarbell con su denuncia de las actividades de la Standard Oil Co. (1903-05) y Gustave Myers con la historia de las grandes fortunas de la época (1907), y que —mediando otras posteriores no menos significativas, como la de Anna Rochester (1936)— culminan en los serios y más actualizados análisis de Víctor Perlo sobre el imperio de las altas finanzas (1957).

Fueron —desde los 60 y 70— los años del XIX en que campean en el escenario norteamericano aquellos celeberrimos *mogules* (Holbrook) del tipo de los Vanderbilt, Gould, Harriman (ferrocarriles y transportes); Rockefeller (refinerías de petróleo); Astor (especulación con terrenos urbanos); Carnegie, Frick, Dupont, Havemeyer (industrias) y tantos otros contemporáneos de aquel fiero, todopoderoso en sus dominios financieros y en cualquiera de sus campos de acción irreplicable personaje que se llamó John P. Morgan. Todos, hábiles y enérgicos emprendedores, aunque raramente escrupulosos en la tarea de acumular prodigiosos caudales multimillonarios sobre la base de la absorción y control tentacular de empresas, explotación de los trabajadores, violaciones de la ley, corrupción de partidos políticos y de funcionarios, trampas financieras, especulación con valores bursátiles, fraudes, latrocinio y el más completo catálogo de tropelías delictuosas.

Históricamente, sin embargo, representaron bastante más que el aspecto anecdótico de la evolución del capitalismo norteamericano hacia la era de los monopolios en fases que algunos autores (Faulkner y otros) definieron con cierta aproximación cronológica: los *pools* (1870-87), más o menos equivalentes al *cartel* europeo, que reciben el primer gran impulso con la Standard Oil Co. de J. D. Rockefeller; los *trusts* (1887-97), que se imponen en el azúcar, whiskey, plomo, algodón y otros sectores; y las *holding companies* (1897-98), que llegaron para quedarse.

La fusión del capital bancario y el industrial —con el control del primero sobre el segundo— tiene, tal vez, una fecha inaugural precisa en la economía norteamericana: la de 1886, cuando J. P. Morgan reunió en su mansión de Nueva York a los principales magnates ferroviarios y les comunicó que los bancos que él representaba habían creado una comisión encargada de liquidar la ruinosa competencia existente entre las diversas empresas de aquel sector. Sin la aprobación de ese comité, dijo, no se podrán crear nuevas líneas ferroviarias ni ampliar las existentes. «Los bancos —advirtió— no harían negocio e impedirían

toda negociación con quienes violen esa orden». Terminó con una típica, abrupta y autoritaria frase: «Que todo esto quede bien claro». Los presentes, por votación, aceptaron el mandato. Los bancos habían establecido la base de su desde entonces creciente hegemonía financiera.

Todo el aparato de gobierno estaba ya al servicio de aquellos poderosos intereses —representativos de una oligarquía financiera entonces solo en los comienzos de su formación. Hasta las fuerzas armadas se convirtieron en su dócil instrumento, como se demostró en 1894 cuando las tropas federales, por orden del presidente Cleveland y bajo el mando del general Nelson A. Miles —un militarote que había ganado grados dirigiendo matanzas de indios y cuya carrera culminaría años más tarde con la ingloriosa invasión norteamericana de Puerto Rico en 1898— aplastaron la huelga de los obreros de Chicago, organizada por la American Railway Union. Como testificó ese mismo año, ante un comité especial del Senado, el más influyente monopolista del sector azucarero, Henry O. Havemeyer, los grandes consorcios —«corporaciones, firmas, *trusts* o como quieran ustedes llamarlos»— practican la «política de los negocios», es decir, «contribuyen sustancialmente a las campañas electorales, aunque en las estatales el partido dominante recibe el aporte mayor».

En realidad, ni siquiera el poder ejecutivo estaba fuera del juego. Durante la segunda administración de Grover Cleveland (1893-97) hubo ásperas denuncias de sus vínculos con la Casa Morgan. Su sucesor, William McKinley (1897-1901) alcanzó la presidencia gracias al respaldo del senador Mark Hanna, conocido representante de conspicuos grupos del poder económico. Fue bajo su aquiescente mandato que se produjo la transición del régimen de *trusts* al de las *holding companies*, que tan definitivo impulso imprimieron al auge monopolista. Ello ocurrió, por cierto, en 1898. A esto, con la fresca testimonial de lo reciente, aludía Gustave Myers apenas una década después: con el advenimiento de 1898 se inauguraba el epocal movimiento de consolidación y centralización de la propiedad en los sistemas de transporte, industrias, minería y servicios públicos. La era de los *trusts* adquirió un empuje irresistible.

Tal vez la polémica que posteriormente desató la obra de J. W. Pratts sobre el papel (a su juicio no importante) de los círculos económicos en los acontecimientos de 1898 recibiría más iluminadoras interpretaciones tomando en cuenta los hechos arriba expuestos. Pues los vínculos causales entre esos medios y las actitudes de los expansionistas de entonces, posiblemente no siempre se expresaron de manera directa. En cambio, la atmósfera empresarial vigente

en aquellos días —febril y hasta desenfrenada, pujante y hasta agresivamente aventurera, influyente en la economía y hasta en los niveles políticos y la opinión pública—, sin duda creó las condiciones capaces de provocar el desfogue de las apetencias imperialistas, que suele coronar al capitalismo en su fase de monopolización.

## El nuevo escenario político internacional

La actividad de los nuevos consorcios monopolistas en el espacio doméstico y, en el internacional, la búsqueda de mercados —según la versión convencional: para ventas, áreas de inversión y fuentes de materias primas—, dio lugar a una aguda rivalidad económica entre las potencias de la época. Y ello, en una coyuntura ya caracterizada por los vínculos oligárquico-financieros con los poderes del Estado, iba reflejándose en la formación de un nuevo equilibrio de fuerzas. El logrado desde 1815 a partir del colapso del imperio napoleónico, aunque mucho más inestable y traumático de lo que Paul Kennedy ha sostenido en su valioso estudio sobre el auge y caída de las grandes potencias, había hecho crisis. Pero el que ahora estaba en proceso de formación —en medio de una compleja trama de tejemanejes políticos, diplomáticos y militares, como trasfondo de opiniones públicas que en cada país moldeaban las clases dominantes según sus intereses— se traducía en actitudes de tensión y hostilidad casi sin precedentes para un período de paz.

La política de pactos y el armamentismo estaban así en el orden del día a fines del xix. Tal política había sido iniciada por Alemania al concertarse con Austria-Hungría (1879), a las que se une después Italia (1882) para constituir la Triple Alianza. Una primera respuesta la produce el similar acuerdo entre Francia y Rusia (1894). A la vuelta del siglo, Gran Bretaña —luego de superar la ilusoria idea de pactar con una Alemania a la que no tarda en identificar como su más peligroso enemigo— olvida sus diferencias con Francia, le hace todo tipo de concesiones y acuerda con ella una alianza (1904) a la que se adhiere Rusia (1907) para constituir la Triple Entente. Los dos conjuntos de grandes potencias que encabezarán la gran conflagración de 1914 están ya frente a frente.

Al iniciarse el siglo xx, las estadísticas económicas tienen ya como rival las relacionadas con la capacidad para enfrentar un conflicto armado. En 1900, la Triple Alianza cuenta con más de un millón de efectivos en su nómina militar y naval, mientras la Entente pasa de los dos millones y medio (más de un millón en Rusia). En el propio año, el tonelaje en buques de guerra de la Triple Alianza supera la cifra de seiscientos mil, pero el

de la Entente casi llega a dos millones (la mitad con bandera británica). Esas cifras —como las correspondientes de carácter económico— variarán notablemente en los años siguientes, pero deciden en definitiva los resultados de la tragedia que se desencadenará apenas tres lustros más tarde. Mientras tanto, respaldan las acciones que en 1898 culminan en la vergonzosa «rebatña» colonial por Africa y el reparto de China en «zonas de influencia», que llevan a cabo las potencias europeas, al tiempo que acá en el Caribe, ingresando en el club imperialista de la época, los Estados Unidos se estrenan interviniendo en el conflicto que Cuba y España dirimen en los campos de batalla de la Isla.

## El desenlace de la lucha por Africa

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, de Africa los europeos solo conocían la franja litoral que silueteaba el continente. La información de que disponían no iba más allá de las áreas aledañas a la costa occidental, donde se desarrolló el comercio y el tráfico de esclavos desde el XVI, y se mantenían enclaves franceses, portugueses y británicos: El Cabo en el cono sur, desde donde avanzaba el *trek* de los *boers*, algunos puntos en el borde oriental, y algo de las partes septentrionales —sobre todo por referencias históricas, como en el caso de Egipto— bajo dominio musulmán y, por tanto, casi inaccesibles a los cristianos de Occidente. De la geografía y las sociedades que poblaban las vastas regiones del interior —y mucho menos de los grandes Estados que se habían sucedido a lo largo de su milenaria trayectoria— muy poco, prácticamente nada, se sabía.

Solo alrededor de mediados del XIX comenzaron a tenerse noticias sobre aquel mundo desconocido, debido a la actividad de exploradores y misioneros religiosos, entre los que destacaron el eminente David Livingstone y, ya al servicio de los colonialistas, Henry M. Stanley. Al iniciarse el último tercio de esa centuria, la situación había cambiado. Despierto el interés de las potencias europeas por aquel continente aún virgen de su dominación política y explotación económica, reiniciaron el movimiento colonialista, hasta entonces limitado a las tierras americanas y asiáticas. El impulso, tardío pero acelerado, comenzó a teñir de diversos colores el mapa de Africa, no sin las pugnas que justamente la historia recogió con el expresivo calificativo de «rebatña». Así, cuando se celebró la famosa Conferencia de Berlín (1884) para arreglar los desacuerdos surgidos con respecto al Congo —que Leopoldo II de Bélgica reclamaba como suyo—, en la que participaron las grandes potencias europeas y, significativamente, también los Estados Unidos,

comenzaron a aflorar, aunque sin la adopción de decisiones formales, las insatisfacciones por el reparto ya logrado.

No podía ser de otra manera. Francia, adueñada desde antes de Argelia, quería hacer realidad su sueño de un «Africa francesa»: uniría aquella a su ya sólida base en el Senegal, bañado por el Atlántico, y extendiéndose por toda la franja del Sudán Occidental, llegaría al Sudán Oriental y la costa somalí hasta las aguas del Pacífico —los ojos puestos en el Mar Rojo y Madagascar. Este sueño contradecía, sin embargo, el que por su cuenta abrigaba Gran Bretaña de dominar un territorio que correría en razón de continuidad «desde El Cabo hasta El Cairo», incluyendo las dos repúblicas *boers*, Uganda, Etiopía y el propio Sudán oriental. Por su parte, Alemania anunciaba también el proyecto de vincular geográficamente sus posesiones en Africa del sudoeste y Africa oriental, a costa de las repúblicas *boers*, Portugal y Gran Bretaña. Portugal decía no renunciar a la idea de unir Angola con Mozambique, desde luego asumiendo para sí territorios que se consideraban ajenos. Hasta la pobre Italia, fracasada en Túnez y Trípoli, especulaba con sus posibilidades de ocupar Etiopía (Abisinia) y el litoral somalí.

A fines de los años 90 la lucha europea por el reparto de Africa se concentraba en tres escenarios: Etiopía, las repúblicas *boers* en el Cono sur y Sudán oriental. El conflicto en Etiopía —que, con apoyo británico, Italia intentaba ocupar— tuvo su desenlace en 1895-96 con la victoria de los etíopes —el singular caso de un país africano que logró mantener su independencia, y el de una casi potencia europea que tuvo que cargar con el desprestigio de ser derrotada por un pueblo del Tercer mundo. El conflicto en el Cono sur culminaría en 1899 con la guerra que Gran Bretaña desató sobre las repúblicas *boers*, las que —pese a su heroica resistencia— logró anexarse tres años más tarde. Pero el episodio más dramático, por sus repercusiones en Africa y en la propia Europa —donde por poco da lugar a una guerra entre Gran Bretaña y Francia—, tuvo lugar en el Sudán oriental: el triunfo inglés sobre el galo vino acompañado del aniquilamiento del más vasto movimiento de resistencia anticolonialista del continente. Ello tuvo lugar, precisamente, en 1898.

En Sudán oriental se había fundado, en 1881-85, un gran Estado independiente dirigido por Muhamed Ahmad —un predicador musulmán, llamado El Mahdi o Mesías, líder revolucionario, quien liberó la región de la tutela anglo-egipcia. Su sucesor, el Califa Abdullah, pese a otras debilidades, se mantuvo firme sin embargo en la posición anticolonialista, con el respaldo de un poderoso ejército mahdista («derviches»). Los británicos —que desde 1882 eran virtualmente los dueños de Egipto—, ansiosos por dar un paso de avance decisivo

en su proyecto de un imperio «desde El Cabo hasta El Cairo», iniciaron una estratégica ofensiva militar contra el rebelde Estado sudanés. Bajo el mando del notorio general Herbert Kitchener, al frente de fuerzas enormemente superiores en hombres, armamento y técnica, lograron tomar Omdurman —la capital fundada frente a Jartum por El Mahdi— en una batalla en la que las ametralladoras Maxim y el rifle Lee-Enfield dieron cuenta de veinte mil soldados mahdistas al solo precio de unas decenas de bajas anglo-egipcias (2-3 de septiembre de 1898). Coronando su hazaña, Kitchener —en emblemático acto vengativo por la muerte del general Gordon, quien había perdido la vida en un encuentro anterior— ordenó destruir el mausoleo que guardaba los restos del Mahdi, los cuales fueron reducidos a cenizas.

Mas, para Francia, con su aspiración de crear un imperio unificado consistente en una franja horizontal que atravesaría el continente de Oeste a Este —interceptando la vertical británica de Sur a Norte— el Sudán oriental también representaba una pieza clave. De manera que cuando las fuerzas egipcias bajo el mando de Kitchener intentaron continuar sus conquistas, se encontraron que a unos 600 km al sur de Omdurman, en un lugar llamado Fashoda, se hallaba estacionada una expedición francesa dirigida por el mayor Marchand. De ello tuvo noticias el general británico unos días después de la ocupación de Omdurman, por lo que marchó hacia aquel punto acompañado de una fuerte escolta. Durante el encuentro conminó a Marchand para que se retirara de una plaza que ya consideraba bajo la jurisdicción británica. «De aquí no me muevo sin órdenes de mis superiores», ripostó el francés. Finalmente, decidieron que el asunto era lo suficientemente grave como para que lo decidieran los gobiernos respectivos. Mientras, acordaron que la bandera francesa no se arriaría, pero que en las cercanías se izarían, juntas, las enseñas británica y egipcia.

Informados Londres y París, la situación se tornó tan tensa que el llamado desde entonces «Incidente de Fashoda» pareció por momentos desencadenar una guerra entre Gran Bretaña y Francia. Finalmente, sintiéndose incapaz de enfrentar tal conflicto, esta última cedió a cambio de ciertas concesiones; y la primera pudo escribir, con la sangre de los heroicos mahdistas, el nombre de su nueva posesión: el Sudán anglo-egipcio.

Pero 1898 fue también el año en que resultaron aniquilados los otros dos importantes focos de resistencia de los africanos.

Ese año marcó el principio del fin del país libre encabezado por Rabeh. Situado en los alrededores del Lago Tchad, comprendía los antiguos territorios de Bornu, Baquirmi y Uadai. Rabeh, luego de rechazar

tres expediciones militares francesas, pereció en la lucha, y el Estado que encabezaba se desintegró poco después.

También en 1898 resultó destruido el vasto y bien organizado Estado que en Sudán occidental había creado el gran Samori —un mandinga de humilde origen, con excepcionales dotes de jefe y estrategia militar, que durante casi ocho años enfrentó con éxito la ofensiva colonialista francesa, para solo caer victimado por una traición.

El erudito húngaro Endre Sik, en su monumental historia del Africa Negra, llegó a la conclusión de que la razón fundamental de la derrota de las tribus africanas en las guerras de liberación consistió en su nivel socioeconómico atrasado y su debilidad militar con relación a las potencias europeas altamente desarrolladas. La diferencia en el grado de desarrollo de las partes en guerra era demasiado grande para ser equilibradas solo por el heroísmo. Incluso las tribus bien organizadas y armadas (y había pocas), luchando aisladas unas de otras, se encontraron impotentes ante un conquistador tan fuerte. Este aislamiento y falta de contactos fueron la segunda razón determinante de la derrota de los pueblos africanos.

## China repartida en «zonas de influencia»

Tampoco era muy conocida China a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Pero cuando cerca de mediados de esta última centuria, Gran Bretaña inicia la ofensiva colonialista en aquel país, ya este no era —ni mucho menos— el de otrora. Ostentaba, desde luego, la categoría de ser la civilización con más larga historia de identidad propia y continuada a través de milenios. Mas los tiempos de las dinastías Tang (618-907) a la Ming (1368-1644), cuando podía considerársela como la primera potencia del mundo —aunque limitada su influencia a las regiones aledañas— habían quedado muy atrás. Bajo la dinastía manchú Qin (1644-1911) su deterioro y rezago en todos los órdenes —por comparación con el pujante avance de los países capitalistas— eran obvios.

La primera Guerra del Opio (1840-42), desatada por Gran Bretaña y que culminó en el Tratado de Nanking (y los suplementarios y similares con Francia y los Estados Unidos), inicia la era de los *tratados desiguales* que duraría todo un siglo, hasta 1945. Con ellos se impusieron a China la cesión de territorios (comenzando por Hong Kong), la apertura de ciudades portuarias al comercio, la injerencia en ellas de autoridades foráneas con derechos de extraterritorialidad, el control por extranjeros de las aduanas, y otros gravámenes a la soberanía nacional. En ningún caso esos exorbitantes

privilegios se obtuvieron sin las más agresivas coacciones.

Los posteriores Tratados de Tianjin se firmaron luego de que Gran Bretaña bombardeó Cantón y, con Francia, la ocupó durante tres años (1858-60). Su ratificación y el Tratado de Beijing fueron posibles después que esas dos potencias tomaron Tianjin y sus tropas marcharon hasta la capital, donde saquearon el Palacio de Verano. Las ventajas que obtuvo más tarde Francia en el sudoeste del país, las logró tras imponerle una guerra (1884-85). Y no tardó Japón —potencia aún en ciernes— en unirse al concierto de las acciones europeas mediante otra guerra, que le permitió hacerse de Taiwán, las Islas Pescadores y la península de Liaotung (1894-95).

Sin embargo, los episodios más vergonzosos de la agresión imperialista contra China aún no habían ocurrido.

Tuvieron lugar, por cierto, también en 1898.

Comenzaron a fines del año anterior cuando Alemania, con el pretexto del asesinato, llevado a cabo por bandidos, de dos de sus misioneros, envió una flota de guerra que ocupó el puerto de Tsingtao, en la bahía de Kiaochow (Shandong). Inmediatamente, declarando esa región su «esfera de influencia», exigió que se le concediera su arrendamiento por noventa y nueve años y otros privilegios que le permitirían establecer una red ferroviaria y la explotación de sus recursos minerales.

En la desenfadada atmósfera colonialista de la época, ello constituyó la señal para que, en el propio año 1898, se desatara una reacción en cadena.

Al cabo de unas pocas semanas (marzo) la flota rusa ocupó Puerto Arturo y obtuvo su arrendamiento, y el de Dairén, y otras concesiones en la península de Liaotung con el objetivo de demarcar su «zona de influencia» en Manchuria. Enseguida (abril), la flota francesa ocupó Guangzhou y amplió los privilegios de que ya disfrutaba en Guangdong, Guangxi y Yunnan, rodeando sus posesiones en Indochina. Poco después (junio), Gran Bretaña obtuvo los Nuevos Territorios al norte, Hong Kong, la base naval de Weihaiwei, frente a Puerto Arturo, y otras ventajas que extendieron las que ya monopolizaba en el sudoeste del país, el valle del Yangtse, Shanghai y sus alrededores.

Las «zonas de influencia» implicaban todo un complejo de privilegios a costa de la soberanía china, incluyendo arrendamiento forzoso de extensas regiones, concesiones ferroviarias, facilidades para la explotación minera, favorecimientos arancelarios, concertación de préstamos y jurisdicción local basada en derechos de extraterritorialidad. Fueron mucho más allá que el sistema de tratados desiguales. Ello representaba, como señaló John K. Fairbanks, un paso decisivo en la

conversión de China en una colonia repartida entre las potencias europeas de la época.

## Un nuevo actor en las escenas del 98: los Estados Unidos

A fines del siglo pasado aún permanecían bajo el poder colonial de España, acá en el Caribe, las islas de Cuba y Puerto Rico y, allá en el Pacífico, el archipiélago de las Filipinas.

A través de toda aquella centuria —desde los tiempos de Jefferson— los Estados Unidos habían tratado de apoderarse de Cuba. Mas, vista la imposibilidad de ello —por la negativa de España a enajenarla y las relaciones internacionales de la época— optaron por aceptar su condición colonial bajo la soberanía de aquella. Entre 1868 y 1878 los cubanos libraron una larga y cruenta guerra por su independencia; fracasado entonces el empeño, reemprendieron la lucha en 1895. Las administraciones estadounidenses (Cleveland y McKinley) mantuvieron aquella tradición política («Cuba norteamericana o Cuba española: nunca independiente»), y se negaron a reconocer la beligerancia del pueblo cubano y su República en Armas, so pretexto de una supuesta «neutralidad» que, en la práctica, solo funcionaba en favor de la metrópoli ibérica.

Al cabo de tres años de guerra, la situación en Cuba era dramática. España, empeñada en mantener su preciada posesión colonial, había llegado al borde del agotamiento de la política de invertir «hasta el último hombre y la última peseta» sin excluir las más inhumanas medidas genocidas —como la ordenada por el Capitán General Valeriano Weyler concentrando la población rural en los centros urbanos. En el curso de unos cuantos meses perecieron cientos de miles de personas victimadas por el hambre y las enfermedades. En realidad, los efectivos de su ejército colonial (entre doscientos cincuenta y trescientos mil) resultaban impotentes contra los cuarenta a sesenta mil de las fuerzas mambisas, bajo el mando de Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Inferiores en número y mal armadas, estas compensaban la desproporción derrochando sabiduría guerrillera, heroísmo increíble y patriotismo indomable.

La prensa de los Estados Unidos, particularmente la escandalosa llamada amarilla, aunque persiguiendo sus propios fines, dedicaba cotidianamente grandes espacios a reflejar la epopeya libertadora que con su sangre escribían los cubanos, y denunciaba los horrores de la represión española. De esta manera, fue formándose en ese país una opinión pública cada vez más solidaria con la isla insurrecta. Influyentes círculos industriales y comerciales comenzaron a manifestarse a

favor de una actitud más positiva de Washington hacia los cubanos, e incluso en el Congreso no faltaron las voces ni los proyectos por un reconocimiento del esfuerzo independentista de la pequeña nación vecina.

Había también personajes que apenas ocultaban su preocupación por el hecho de que los Estados Unidos permanecieran, en lo fundamental, al margen del nuevo reparto del mundo que protagonizaban las potencias europeas. Un número de ellos habían sido influidos, además, por las teorías de Alfred T. Mahan sobre la influencia en la historia de la superioridad de la guerra y el poder marítimos. Tales tesis implicaban para los Estados Unidos la necesidad de poseer bases navales en el Caribe, Filipinas, Hawai y Samoa. Este grupo —llamado los *jingoístas*, y que incluía algunos elementos ubicados en importantes posiciones públicas— albergaba proyectos francamente expansionistas, y el conflicto cubano-español alentaba entre sus componentes la tendencia a considerarlo una oportunidad para intervenir militarmente y cosechar el correspondiente botín colonial en aguas del Caribe y el Pacífico.

Durante su administración, William McKinley, que había llegado a la presidencia en viciadas elecciones y gracias al apoyo decisivo del mundo de los grandes negocios —«el representante de la plutocracia», se decía entonces—, se condujo en todo momento, no obstante las posiciones programáticas del Partido Republicano que lo llevó al poder, como un enemigo personal de la independencia de Cuba. Aunque al principio evadía pronunciarse sobre ello, una vez resuelta la política a seguir en los dos más polémicos temas electorales —proteccionismo en lo comercial y patrón oro en lo monetario—, al asumir la cuestión de Cuba un primer plano, adoptó abiertamente la misma actitud que su antecesor Grover Cleveland: negarse a reconocer la beligerancia de los cubanos. Ello implicaba que mientras España disfrutaba de toda clase de facilidades para abastecerse de armas y otros pertrechos en los Estados Unidos, a los cubanos se les perseguía y despojaba de tales recursos cuando, con inauditos esfuerzos, lograban reunirlos para su envío a los mambises de la Isla. Durante la guerra y hasta la intervención en 1898, de 71 expediciones organizadas por la emigración, 33 fueron confiscadas por las autoridades norteamericanas (aparte de las frustradas por Gran Bretaña y la propia España). McKinley se mostró, además, insensible a las barbaries de la represión española en Cuba; manifestó, en todo caso, su preocupación por el impacto que la creciente ruina de la economía de la Isla podía tener en las inversiones estadounidenses en ella (unos cincuenta millones de dólares).

En realidad, su incompreensión y desprecio por la lucha cubana rayaba a veces en el absurdo.

En una entrevista que sostuvo con Horacio Rubens, asesor jurídico de la delegación cubana, McKinley, en tono descompuesto, lo increpó diciéndole que lo que los independentistas cubanos querían era que los Estados Unidos intervinieran en el conflicto pagando los costos en dinero y vidas humanas. Rubens, tal vez recordando que la dirigencia libertadora rechazaba la idea de tal intromisión y la memorable postura de Maceo contraria a «intervenciones e injerencias extrañas» —solo pedía veinticinco o treinta mil fusiles y un millón de balas para ganar la guerra—, le ripostó que los cubanos se limitaban a demandar del gobierno norteamericano el reconocimiento de su beligerancia. McKinley estalló entonces con esta increíble confesión:

—¡Lo que yo no comprendo son las razones que pudieran tener los cubanos para levantarse contra el poder de España, su Madre Patria!

—Pues esas razones —fue la justa respuesta de su interlocutor— son las mismas esgrimidas por los norteamericanos que, bajo el mando de Washington, se lanzaron a la guerra contra Gran Bretaña.

El presidente dio por terminada la entrevista.

Finalmente, bajo la presión de las circunstancias, optó por abandonar la línea de no intervención, y a través de su embajador en Madrid —como siempre, excluyendo a los cubanos de cualquier negociación— comenzó a dictarles a las autoridades españolas lo que pensaba era la solución del problema cubano: tenía en mente la concesión de la autonomía a la isla, pero exigiendo el cese inmediato de la guerra, con la interposición de los buenos oficios de los Estados Unidos, si fuera necesario.

Corría el mes de octubre de 1897 y el gobierno español argumentó que ya estaba destituido el General Weyler —que había ordenado la criminal reconcentración— y se tomaban medidas para humanizar la guerra, e incluso otorgar la autonomía a Cuba. Varias semanas después, en su mensaje anual al Congreso, al tiempo que reiteraba su posición de no reconocer la beligerancia del pueblo cubano, McKinley manifestaba que la intervención norteamericana en el conflicto, dadas las concesiones hechas por España, ya no era necesaria. En realidad, Weyler resultaba ya insostenible: había fracasado en sus esfuerzos por sofocar la insurrección, y su brutal ejecutoria represiva había concitado una repulsión universal. La autonomía había sido rechazada con tal firmeza por los insurgentes, que pusieron en vigor un decreto mediante el cual se aplicaría la pena de muerte a quien llegara a un campamento con propuestas de paz que no contemplaran la independencia.

Por otra parte, cierta alusión que el presidente McKinley hizo en su mensaje, desechando la idea de anexar a Cuba, estaba en flagrante contradicción con

las gestiones (frustradas) que su embajador en Madrid hacía para comprársela a España.

Así estaban las cosas al iniciarse 1898.

La economía cubana se hallaba devastada, y la sangre continuaba derramándose en los campos de batalla; mientras España —con tozudez digna de mejor causa— persistía en mantener la condición colonial de la Isla con una guerra que, estratégicamente, ya tenía perdida. Intentaba, sin embargo, lograr una coalición europea que la apoyara frente a las presiones de los Estados Unidos y el peligro de un choque bélico con estos; pero, a lo sumo, obtenía la abstención de las otras potencias: Gran Bretaña cuidaba de mantener sus buenas relaciones con Washington; Francia no haría nada sin la participación de Gran Bretaña y Rusia; Rusia consideraba a Cuba respetable zona de influencia norteamericana; y solo Alemania, con ojos puestos en la posibilidad de heredar las posesiones españolas, parecía dispuesta a hacer algo aun con el disgusto de los Estados Unidos —y hasta lo hizo, intentando una intercesión papal en el conflicto. En los propios Estados Unidos, sin embargo, crecía un movimiento decididamente favorable a la lucha de los cubanos, entre los más diversos círculos y la opinión pública.

A mediados de febrero, el acorazado norteamericano *Maine*, que realizaba una extraña y aún sospechosa «visita de cortesía», explotó en el puerto de La Habana: perecieron 460 de sus oficiales y tripulantes. Los Estados Unidos, tras viciadas investigaciones, se apresuraron a sostener que se trataba de un sabotaje, y acusaron a España como autora del siniestro —lo cual fue de inmediato rechazado por esta. El origen de aquella tragedia aún no ha sido aclarado, aunque durante un tiempo fue cobrando cuerpo cierto consenso de opinión alrededor de las tesis de que se trató de una autoagresión, elaborada en los propios Estados Unidos para facilitar la declaración de guerra contra la metrópoli española. En todo caso, el hecho es que el ambiente en los medios norteamericanos se tornó aún más belicoso y se popularizó la consigna «*Remember the Maine*».

En el Congreso, la cuestión de Cuba adquirió incontenible impulso. Apenas dos meses más tarde —con el apoyo de la opinión pública y bajo la presión de elementos progresistas, expansionistas y otros intereses— el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron una Resolución Conjunta, que McKinley sancionó el 20 de abril. La Resolución no reconocía la República en Armas, pero sí que «Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente». Comprometía a los Estados Unidos a no intentar anexarse o establecer protectorado sobre la Isla, y facultaba al Presidente para utilizar todas las fuerzas militares y navales de la nación para cumplir esos objetivos.

Al día siguiente, jueves 21, el gobierno de Madrid comunicó al embajador norteamericano que esa Resolución, al negar la soberanía de España sobre Cuba y amenazar intervenir en la Isla con las armas, equivalía a una declaración de guerra. Unas 24 horas después, McKinley ordenaba el bloqueo naval de la isla, y otras tantas más tarde —el sábado 23— España, en medio de una equívoca y absurda efervescencia de apoyo popular, declaraba formalmente la guerra a los Estados Unidos. Notificado de ello, el presidente norteamericano aprobó el envío de un mensaje, ya preparado, al jefe de su escuadra estacionada en Hong Kong, para que procediera a la destrucción y captura de las fuerzas navales españolas en Filipinas. Más tarde, el lunes 25, se declaró oficialmente la guerra contra España. Menos de una semana después, el 30, McKinley recibió la noticia de que aquella armada española había sido puesta fuera de combate.

El resto de la historia es bien conocido.

El 10 de junio, con apoyo de las fuerzas cubanas bajo el mando del Lugarteniente General Calixto García, las tropas estadounidenses desembarcaron en la costa sur del oriente de la isla. Constituían un ejército heterogéneo en el que se mezclaban soldados y oficiales regulares con toda laya de voluntarios improvisados y aventureros. Los dirigía un incompetente y mastodónico general, cuyas 350 libras de peso requerían una escolta permanente que lo abanicara para resistir los calores del trópico. El 1º de julio, con decisivo apoyo cubano, se celebraron las dos más importantes batallas en las cercanías de Santiago de Cuba, y al día siguiente las mismas fuerzas mambisas lanzaron una ofensiva que completó el cerco de la ciudad. El 3 de julio la armada española —en una suerte de ejercicio de tiro al blanco— fue hundida en ese puerto, y el 16 se rindió la ciudad.

En diciembre se firmó en Versalles la paz, sin la participación de los cubanos. Los Estados Unidos, como botín de guerra, se apoderaron de Puerto Rico, Filipinas y Guam. En Cuba se estableció un gobierno de intervención militar norteamericano con el que se inicia la etapa histórica de su nueva dependencia.

Visto en su perfil histórico más amplio, así terminó aquel, por todos los hechos expuestos, memorable año 1898.